

## INTRODUCCIÓN

1. El presente trabajo abarca tres aspectos del debate penal contemporáneo, la justificación político-criminal y técnicas de protección de los bienes jurídicos colectivos, la discriminación de género a través del sistema penal, y las perspectivas de reforma de la legislación penal. Aunque se trata de diversos problemas, relativos al “moderno derecho penal”, al “derecho penal clásico” y al derecho penal *de lege ferenda*, respectivamente, tienen en común el afán de contribuir a la construcción de un *ius puniendi* no neutral, sino orientado a consecuencias político-criminales satisfactorias desde la perspectiva de un Estado social y democrático de derecho.

2. En efecto, «‘Sociedades de riesgo’ y ‘bienes jurídicos colectivos’» pone de relieve las limitaciones de los instrumentos del llamado “derecho penal clásico”, fiel tributario de los principios liberales de causalidad, legalidad o lesividad, para enfrentar los riesgos de las sociedades modernas. En esa perspectiva, se plantea la necesidad de proteger autónomamente los bienes colectivos como el ambiente natural, los intereses de los consumidores o la salud pública, al margen del disvalor del resultado para los bienes individuales complementados, mediante la técnica de los delitos de peligro a partir de objetos con función representativa o “bienes jurídicos intermedios con función espiritualizada” como los denominara en su día Schünemann.

3. De otro lado, el aporte titulado “Acerca de la ‘discriminación de género’ a través de las reformas del derecho penal sexual” plantea, teniendo en cuenta el derecho peruano y comparado, con específicas referencias al ordenamiento mexicano, el

problema de desigualdad de trato en los procesos de criminalización primaria y secundaria. Ante ello se propone interpretaciones *de lege lata* orientadas a superar este problema en el terreno de la tipicidad, de las consecuencias jurídicas del delito, con especial énfasis en el proceso de individualización judicial de la pena, abordándose además aspectos procesales como la conveniencia de adoptar reglas de persecución oficial al margen de la voluntad de la víctima.

4. La tercera y última contribución, “‘Superación del pasado a través del derecho penal’? —notas sobre la reforma del Código Penal peruano a diez años de su vigencia—”, aborda el problema de la remoción de la legislación penal autocrática gestada en Perú en el periodo 1990-2000, teniendo presente la necesidad de vincularla a los fundamentos constitucionales del *ius puniendi*, inclusive en el terreno penal juvenil y militar. Ello en el marco de la intensa discusión en Iberoamérica sobre el rol de la política criminal dentro del quehacer dogmático, que enfrenta a las llamadas escuelas del funcionalismo sistémico que representa el profesor Jakobs (Bonn) y del funcionalismo moderado que fundara el profesor Roxin (München) con su famoso trabajo *Kriminalpolitik und Strafrechtssystem* (1970).

5. Además de mi satisfacción por la posibilidad de acercarme a la comunidad jurídica mexicana a través de estas reflexiones, quiero agradecer especialmente a mi estimado colega, el profesor doctor Enrique Díaz-Aranda, a quien debo, además del prólogo que la acompaña, la iniciativa y concreción de esta publicación. No menos intensa es mi gratitud al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por asumir el riesgo de la misma.

Lima, 6 de mayo de 2002